

Conservación de datos de facturación telefónica - Año 2000

Se ha solicitado de la Agencia que se indique el plazo durante el cual procederá la conservación de los datos de carácter personal derivados de la facturación del servicio telefónico, a las que se refiere en el artículo 65.2 del Reglamento que desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio.

Con carácter previo, debe indicarse que la conservación a que alude el artículo 65.2 del Reglamento se refiere a aquellos supuestos en que los datos son tratados exclusivamente "al objeto de realizar la facturación y los pagos de las interconexiones", no encontrándose incluidos en el citado plazo los supuestos en que los datos sean tratados, previo consentimiento del interesado, con la finalidad de promoción comercial, en los términos descritos en el artículo 65.3, en cuyo caso, el consentimiento "será válido hasta que los abonados lo dejen sin efecto de modo expreso", lo que supone que, mientras no exista dicha revocación, los datos podrán seguir siendo objeto de tratamiento.

Sentado lo anterior, esta Agencia Española de Protección de Datos coincide con el criterio sustentado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que considera que el período de impugnación de la factura será el de tres meses, que se desprende del artículo 61 del propio Reglamento. Del mismo modo, al no existir plazo especial al efecto, el derecho del operador a exigir el abono de la factura se regirá por lo dispuesto en el artículo 1966 del Código Civil, dado el vencimiento de los pagos, inferior a un año, siendo dicho plazo de cinco años.

Del análisis conjunto de ambos preceptos se desprende que, en caso de que haya sido abonada la factura, el operador deberá cesar en el tratamiento de los datos a los que se refiere el artículo 65.2 transcurrido el plazo de tres meses anteriormente indicado, encontrándose legitimado para persistir en el tratamiento exclusivamente en caso de impago y durante el plazo de cinco años que la Ley le concede para ejercitar las acciones conducentes al abono de la factura. Por último, si existieran litigios pendientes, derivados del ejercicio de acciones de impugnación de la factura o tendentes a lograr el cobro de la misma, los datos podrán conservarse durante la tramitación de los mismos, en tanto no recaiga resolución definitiva, si bien sólo podrán utilizarse a fines probatorios.